

CATY LUZ ZÁRATE

El conflicto social en Bolivia: a la búsqueda de una interculturalidad incluyente

La Bolivia de hoy no es muy diferente de la de hace treinta años, con situaciones de inestabilidad social impulsadas por hechos coyunturales pero que recrean una historia de desigualdades. La sucesión reciente de momentos de crisis, desde el año 2000, ha puesto en evidencia la inestabilidad del sistema democrático y la disconformidad de la población con decisiones que afectan al futuro del país. Las fracturas del país en líneas étnicas, regionales y de clase, configuradas desde los tiempos coloniales, se han visto agravadas con la aplicación, desde los años ochenta, de políticas económicas neoliberales.

Uno de los aspectos más graves de la crisis que ha vivido Bolivia en los últimos años es la fragmentación del país en áreas geográficas muy diferenciadas. Por un lado se ubica el occidente, representado por las mayorías indígenas, donde los niveles de pobreza debidos a la escasez de tierra cultivable y el dominio de las viejas elites políticas incidieron en la aparición de liderazgos comunitarios radicales y ocasionalmente autoritarios. Las movilizaciones sociales son parte esencial de su estrategia de negociación y presión, sobre todo en El Alto (ciudad de migrantes campesinos e indígenas), La Paz (sede del gobierno y con una importante trayectoria sindical) y Cochabamba (que alberga al trópico cochabambino, habitado fundamentalmente por campesinos cultivadores de hoja de coca y principal sede del Movimiento al Socialismo, MAS). Por el otro lado aparece el oriente como nuevo centro de gravitación política, una zona pujante donde hay más disponibilidad de

Caty Luz Zárate trabaja en el Programa de Sistemas de Prevención y Resolución de Conflictos (PSPRC) de la Organización de Estados Americanos (OEA), en Bolivia. Es autora de *Herramientas para el manejo y resolución temprana de conflictos*, GTZ – CEPAS/CARITAS, La Paz, 2004. La opinión vertida en este documento es exclusiva de la autora.

Las diferencias étnicas y raciales, regionales y de clase, configuradas desde la colonia, se profundizaron y agravaron con las agresivas políticas de libre mercado de finales de los años ochenta del siglo pasado

tierra cultivable. Aquí se concentran los empresarios más dinámicos, grandes jefes políticos de los partidos tradicionales, ciudadanos cruceños urbanos, colonizadores, migrantes de todo el país e grupos indígenas. Las elites de Santa Cruz han logrado articular a otros departamentos como Tarija, Pando y Beni, en un espacio geográfico llamado "Media Luna", que representa la zona con mayores reservas de gas.

Las diferencias étnicas y raciales, regionales y de clase, configuradas desde la colonia, se profundizaron y agravaron con las agresivas políticas de libre mercado de finales de los años ochenta del siglo pasado. Esto dio lugar a un ambiente de insurrección y levantamientos populares en contra de las elites políticas y económicas, lo que incluye una demanda de devolución y control de los recursos estratégicos, como el gas y el petróleo.

Tres hechos importantes precedieron a la crisis estatal que vivió Bolivia en el primer trimestre de 2005, y que condujo a la caída del gobierno de Carlos Mesa y a la convocatoria anticipada de elecciones generales:

- A inicios del año, la Federación de Junta Vecinales de la ciudad de El Alto (FEJUVE) exigió al gobierno la suspensión inmediata del contrato de suministro de agua con la empresa Aguas del Illimani (filial de la transnacional francesa Lyonnaise des Eaux), por incumplimiento de contrato. Tras dos días de paro cívico en la urbe alteña, el gobierno aceptó a regañadientes la petición. El conflicto se inscribe en un creciente rechazo popular a las privatizaciones de servicios públicos, especialmente del agua.
- Casi paralelamente, el Comité Cívico Pro-Santa Cruz, apoyado por varios sectores sociales y empresariales, convocó un cabildo para impulsar las autonomías departamentales y presionó al gobierno para convocar un referéndum autonómico con fuerza vinculante. El gobierno de Carlos Mesa se vio forzado a asumir la demanda y se declaró incluso "autonomista", con el objetivo de profundizar en la descentralización, vía autonomías, en todos los departamentos. Esto produjo tensión social y puso en evidencia el enfrentamiento del oriente boliviano con sectores de occidente, que interpretan la petición como el indicio de un movimiento separatista, impulsado por empresas transnacionales y con la finalidad de imponer su agenda particularista por encima de la agenda nacional.¹
- Tras la radicalización de posiciones y el deterioro de las relaciones entre el ejecutivo y el legislativo por la polémica nueva Ley de Hidrocarburos (el Congreso la promulgó en contra de la visión presidencial), el gobierno de Mesa colapsó y él renunció a la primera magistratura del estado. En medio de la incertidumbre social, las negociaciones y los llamamientos públicos a no renunciar, el Congreso rechazó su dimisión, una situación que varios sectores interpretaron como una jugada política desesperada del presidente. Los movimientos sociales

¹ Ver Cletus Gregor Barié, "Bolivia: el trasfondo de la 'guerra del gas'", en *Papeles de cuestiones internacionales*, Nº 84, invierno de 2003-2004. También Marco Gandarillas, "La guerra por el gas: rebelión boliviana contra el saqueo y los saqueadores", *Alternativas Sur. Economía y geopolítica del petróleo*, Vol. II, Nº 2, 2003.

siguieron presionando y el MAS, principal partido de oposición, amenazó con movilizar a sus bases y bloquear el desarrollo de las sesiones del Congreso para modificar la ley de hidrocarburos, así como impedir que se definiera una fecha para el referéndum autonómico de Santa Cruz.

En medio de esta tensión creciente entre demandas regionales radicalizadas y con un Congreso enfrentado al gobierno, el país se instaló en el desasosiego y la desesperanza. La FEJUVE reforzó sus anteriores reivindicaciones y exigió “nacionalización de los hidrocarburos y Asamblea Constituyente”, un llamamiento al que se sumaron la Central Obrera Boliviana (COB), maestros, gremialistas, cajas de salud, mineros, organizaciones indígenas y originarias, campesinos y, finalmente, el MAS. Cuando el máximo líder de la COB, Jaime Solares, pidió la renuncia del presidente y la intervención de una junta militar patriótica al estilo venezolano, dos tenientes del ejército respondieron con un llamamiento a derrocar al presidente y un grupo de 600 policías se declaró temporalmente en huelga, situación que aprovecharon para reivindicar demandas salariales y mejoras en el trabajo. Ambas situaciones tuvieron un carácter anecdótico, ya que los altos mandos militares y policiales intervinieron enérgicamente a favor de una solución institucional.

Los sectores empresariales de Santa Cruz también reclamaban la salida del presidente, mientras los comités cívicos de los departamentos de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando limitaban su pedido a la convocatoria de referéndum autonómico. Los indígenas de oriente, en cambio, se sumaron a la reclamación de Asamblea Constituyente.

Las dos agendas (en oriente referéndum autonómico y en occidente nacionalización y Asamblea Constituyente) no encontraban puntos de coincidencia y comenzaron a desarticularse, mientras los actores se anclaban en posiciones irreductibles. Las partes en conflicto coincidían en pedir la renuncia de Mesa, pero con motivaciones opuestas. Para los empresarios y sectores cruceños dominantes, Mesa era incapaz de mantener el orden e imponer “mano dura” para evitar un desenlace revolucionario popular. Los movimientos sociales, en cambio, le exigían firmeza y coherencia con los compromisos asumidos públicamente en octubre de 2003. Esta disyuntiva extremista atentaba contra los principios de un presidente que se declara abiertamente pacifista y concertador.

Demonios al acecho

En el marco de esta fuerte polarización, movilizaciones en La Paz y El Alto, la inercia del ejecutivo y un Congreso paralizado, sectores radicales incitaban al odio social y atentaban con los derechos humanos de transeúntes y manifestantes. Un racismo de doble vía se extiende en el escenario nacional. Por un lado, la Unión Juvenil Cruceñista (UJC), fuerza de choque del Comité Cívico, interceptó una marcha de campesinos que intentaba llegar al centro de la ciudad reclamando la Asamblea Constituyente, y los atacó con palos y piedras. Jorge Hollweg, presidente de la UJC, justificaba la violencia: “Impediremos el ingreso de cualquier marcha campesina hasta el centro de la ciudad, más aún si es protagonizada por los

collas del MAS".² Mientras tanto, los manifestantes del occidente rompían los vidrios de los autos, destrozaban negocios y agredían a los transeúntes, a quienes les cortaban las corbatas (símbolo de la elite blanca) para luego quemarlas.³

En la búsqueda de salidas, los grupos enfrentados sólo contemplaban la ganancia de uno sobre la pérdida del otro. Los grupos sociales occidentales temían que si la Asamblea Constituyente se celebraba tras el referéndum autonómico esto significara condiciones y límites previos, especialmente en el régimen de la tierra y las reglas para el desarrollo de la política energética. La pregunta del referéndum autonómico, propuesta por el Comité Cívico Pro Santa Cruz, revela la veracidad de estos temores: "¿Está de acuerdo en que se busquen en el país las autonomías departamentales, con transparencia efectiva de competencias y atribuciones, las mismas que tendrán por objeto en su jurisdicción territorial disponer de sus recursos, elegir a sus autoridades y darse su propia administración, con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes de cada departamento y del país, todo de conformidad con las atribuciones que otorga al pueblo de Bolivia el artículo cuadro de la Constitución Política del estado?".⁴

Por el contrario, los sectores dominantes cruceños y parte de la población se planteaban el riesgo de perder grandes extensiones de tierras en el escenario de una Asamblea Constituyente dominada por indígenas y campesinos.

Momentos dramáticos

Durante más de dos semanas La Paz estuvo en riesgo de colapsar socialmente, con escasos carburantes y alimentos y sin actividad laboral. Bolivia estuvo paralizada a escala nacional, ya que las principales ciudades estaban incomunicadas. Respondiendo al llamado de Carlos Mesa, la Iglesia católica convocó un diálogo de emergencia con los principales representantes de los tres poderes del estado y dirigentes sociales y empresariales. Dos días después de iniciarse las conversaciones, el presidente Mesa puso su cargo por segunda vez a disposición del Congreso. La Constitución establece que si un presidente renuncia le suceden, en orden jerárquico descendiente, los siguientes: el presidente del Congreso, el presidente de la Cámara de Diputados y el presidente de la Corte Suprema de Justicia (quien debería convocar nuevas elecciones). El presidente del Congreso, Horlando Vaca Díez, y de la Cámara de Diputados, Mario Cossío, representaban para la mayoría de la población a los partidos tradicionales, por lo que varios sectores exigieron que la sucesión fuera asumida por Eduardo Rodríguez, presidente de la Corte Suprema.

² *Colla* es una expresión despreciativa de los cruceños hacia los nacidos en el altiplano.

³ "Nuestros peores demonios se han desatado, el odio social y racial se expresan en las consignas en juego y en las acciones sin perspectivas... Presenciamos el dramático y extemporáneo esfuerzo por imponer una identidad absoluta, eliminando a sus contradictores, los blancos, ricos, cambas o a los indígenas, pobres, collas" (Fernando Molina, "Insurrección", *El Pulso*, 2005).

⁴ Citado en Abdel Padilla, "Autonomías versus Asamblea Constituyente", *El Pulso*, 20 de mayo de 2005.

La decisión de aceptar la renuncia de Mesa se hizo esperar. El presidente del Congreso ordenó trasladar las sesiones de La Paz a la capital, Sucre, para garantizar la seguridad de los representantes. Aunque se perfilaba un acuerdo en el Congreso entre los partidos tradicionales, a favor de Vaca Diez, la presión social en las calles con marchas y bloqueos y la sugerencia discreta de los facilitadores de la Iglesia provocaron que finalmente ambos presidentes (del Congreso y la Cámara de Diputados) desistieran de asumir la sucesión. Eduardo Rodríguez llegó a la presidencia con el encargo constitucional de realizar elecciones generales. La actuación de las Fuerzas Armadas fue ejemplarmente institucional y equilibrada; se mantuvieron en máxima alerta y exhortaron al Congreso cumplir la Constitución pero sin alejarse de las demandas del pueblo. Sin embargo, la muerte de un manifestante minero en circunstancias inciertas, a diez kilómetros de Sucre, dejó un sabor amargo de las tres semanas de agitación social.

Eduardo Rodríguez, segundo presidente de la transición

Apenas efectuada la sucesión presidencial, los grupos sociales decidieron desbloquear los caminos y cesar las movilizaciones. Hubo momentos muy emotivos, como la salida de los mineros de La Paz, despedidos por muchos como héroes. Los intentos de continuar con el paro en El Alto se desvanecieron y el país comenzó su gobierno de transición.

Rodríguez dejó claro que sólo se quedará hasta diciembre, cuando se convoquen las elecciones, y que su único objetivo es administrar un proceso electoral que permitirá elegir un nuevo presidente y vicepresidente. Llamó a los sectores en conflicto a lograr un acuerdo nacional que permita responder a las principales demandas, dentro de las posibilidades reales. Se refirió al referéndum autonómico y a la Asamblea Constituyente como procesos que debían avanzar por buen camino y a la responsabilidad compartida del ejecutivo y del legislativo. Por último, sobre los hidrocarburos, convocó al país a abordar el tema de su efectiva recuperación para el pueblo boliviano.

Un nuevo debate tuvo lugar en los días siguientes en el Congreso. ¿Las elecciones deben definir nuevo presidente y vicepresidente o elegir también un nuevo Parlamento? Tras amplias discusiones, se acordó realizar unas elecciones generales que permitan renovar íntegramente el sistema político.

También se avanzó en las fechas de cuatro importantes procesos electorales. En diciembre de 2005 se elegirá presidente, vicepresidente, Congreso y prefecto y en junio de 2006 habrá elecciones de asambleísta y referéndum autonómico (pese a las amenazas de Santa Cruz de realizar por su cuenta el referéndum autonómico y las elecciones de prefectos el 12 de agosto de 2005, y tras las aclaraciones de la Corte Nacional Electoral de que no validaría ningún proceso no administrado por ella).

Estas decisiones dieron paso a un ambiente de paz aparente, favorecido por la figura de un nuevo presidente moderado y tímido. La pregunta inevitable es cuánto tiempo se mantendrá esta sensación de tranquilidad, dado que de nuevo se presagian conflictos, fundamentalmente por la tierra (punto clave en la dinámica de conflictividad en Bolivia).

Estas decisiones dieron paso a un ambiente de paz aparente, favorecido por la figura de un nuevo presidente moderado y tímido

Escenarios posibles

Distintos líderes políticos y sociales comienzan a posicionarse en este clima preelectoral. Ya desde las elecciones municipales de 2004 comenzaron los cambios en el panorama político y se pusieron en entredicho los liderazgos de los partidos tradicionales: Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR), Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) y Acción Democrática Nacional (ADN).

Hasta el momento, ningún aspirante a candidato se auto-define de tendencia derechista, pese a que algunos, como Jorge "Tuto" Quiroga y Samuel Doria Medina, tienen sus orígenes ideológicos en un partido tradicional (el ADN). "Tuto" se ha afiliado recientemente a una nueva agrupación ciudadana, la Alianza Siglo XXI, y se ha declarado opuesto a los "radicalismos de todo tipo". El ex presidente reconoce también que el modelo económico de libre mercado no ha dado respuestas suficientes para generar bienestar, por lo que plantea "combatir las inequidades del mercado" y "promover una inversión extranjera comprometida con el interés colectivo, restituir la autoridad estatal y el imperio de la ley, reescribir el pacto social a través de la Asamblea Constituyente y luchar contra la pobreza".⁵

Samuel Doria Medina se define como un empresario productor y generador de empleo. Ante el debilitamiento de los partidos políticos tradicionales, ha renunciado al ADN y fundado su propio partido, Unidad Nacional. Este reconocido empresario considera que la inversión extranjera es beneficiosa, pero subraya que los bolivianos tienen derecho a ser dueños de su país. Su partido, por el momento, no tiene una ideología política clara. Ambos candidatos se consideran del "centro político". No es descartable la posibilidad de que aparezca un verdadero candidato de derecha, propuesto desde Santa Cruz, que represente más abiertamente a los grupos empresariales y sectores cívicos.

Desde la vertiente izquierda, el máximo líder del MAS y de los campesinos cocaleros, Evo Morales, necesita trascender las federaciones campesinas y atraerse a otros sectores urbanos. El MAS tiene como bandera la nacionalización de los hidrocarburos y la pronta realización de una Asamblea Constituyente, lo que representa el sentir popular y la demanda de un gran porcentaje de la población. Existen divisiones y divergencias con otros líderes y organizaciones sociales como la FEJUVE, la COB y el Movimiento Indígena Pacha Kuti (MIP), pero no descartan alianzas posteriores. El escenario político podría apuntar a la conformación de un Frente Amplio, anti-neoliberal, municipalista, de centro-izquierda y encabezado por los alcaldes de La Paz, Cochabamba, Sucre, Oruro y Potosí. René Joaquino, alcalde de Potosí, es uno de los candidatos municipalistas presidenciables. Estos jugaron un papel importante como aglutinadores sociales durante los acontecimientos de junio.

El panorama podría conducir a dos escenarios muy diferentes: la agudización de la polarización social o la renovación de los liderazgos políticos. En el primero, los partidos tradicionales podrían utilizar las elecciones para "reciclarse" bajo el nombre de agrupaciones y defender intereses clientelares en un Congreso poco representativo, lo que retrasaría las decisiones sobre los grandes temas naciona-

⁵ "La derecha disfrazada de centro", *Juguete rabioso*, 10 de julio de 2005.

les (la Constituyente, el régimen de tierras, el referéndum y el alcance de las autonomías y la política energética). En este ambiente, de aplazamiento o manipulación de la Asamblea Constituyente, la población seguramente respondería una vez más con mecanismos violentos y antidemocráticos (lo que reforzaría expresiones racistas y xenóforas). Un desenlace de estas características puede provocar una intervención externa o de la reaparición de los fantasmas de una guerra civil.

El escenario constructivo parte de unas elecciones generales más representativas y un ejecutivo y legislativo que establecen alianzas para afrontar sus responsabilidades, mediante la búsqueda de salidas estructurales a los conflictos. Las lecciones aprendidas de cinco años de confrontación violenta entre bolivianos conducirían a renovar los liderazgos políticos y sociales (que deberían ser muy diferentes a los actuales, vinculados aún a una visión anti-estatista que procede de las épocas dictatoriales), como resultado del voto incluyente de los sectores sociales marginados y discriminados.

En este contexto optimista, los Comités ya existentes a favor de la Asamblea Constituyente y los que defienden la autonomía deberían desarrollar estrategias comunicativas para crear escenarios democráticos de comprensión, no de venganza e imposición. Esto plantea retos para el diseño técnico de las propuestas llevadas a la Constituyente. También hay que generar condiciones para el diálogo y la negociación sobre temas clave, basados en los intereses del país: régimen de tierra, política energética, administración de justicia y derechos indígenas.

El referéndum de las autonomías debería implicar cierto espíritu solidario entre los departamentos ricos y pobres y altos niveles de madurez democrática. Bolivia necesita reposicionarse como un interlocutor válido en el concierto internacional, si pretende sensibilizar a la opinión pública sobre reivindicaciones como la recuperación de la salida al mar. Aunque es un país volátil, en momentos de extrema crisis de gobernabilidad ha optado por la democracia y la cordura. Algunos analistas nacionales indican que “hemos estado al borde del abismo, pero jamás nos hemos lanzado”.

Construir lazos interculturales

Una salida constructiva exige generar las condiciones para trascender un estado multicultural y multiétnico (como mera constatación) y llegar a un estado intercultural (como relación entre culturas). Uno de los primeros pasos es el reconocimiento y la autocrítica de las dinámicas culturales y regionales y la construcción de nuevas reglas de juego, solidarias y justas, para la convivencia en los escenarios políticos, sociales y económicos. Bolivia precisa superar de forma urgente y desde espacios cotidianos los diferentes racismos y la discriminación de doble vía, para transformar sus conflictos de forma constructiva y sin llegar a la aniquilación del contrario.